

Fecha: 22-01-2026

Medio: Contraplano Reñaca-Concón-Quintero-Puchuncavi-Zapa

Supl.: Contraplano Reñaca-Concón-Quintero-Puchuncavi-Zapa

Tipo: Noticia general

Título: Vecinos de Viña del Mar se movilizan masivamente contra megaproyecto Miraflores por graves riesgos y denuncian fallo judicial cuestionado

Pág.: 54

Cm2: 766,1

VPE: \$ 861.885

Tiraje:

Lectoría:

Favorabilidad:

Sin Datos

Sin Datos

☐ No Definida

Vecinos de Viña del Mar se movilizan masivamente contra megaproyecto Miraflores por graves riesgos y denuncian fallo judicial cuestionado



Una masiva y pacífica movilización vecinal sacudió los sectores de Miraflores Alto en Viña del Mar, donde cientos de familias, apoderados del Colegio Ana María Janer y dirigentes sociales salieron a las calles con un mensaje claro: «No es solo ruido, es supervivencia». La protesta busca detener de inmediato el avance del polémico megaproyecto «Miraflores I y II», que contempla la construcción de 5 torres de 15 pisos con 500 departamentos en una zona de quebrada con pendientes superiores al 40%.

La comunidad, organizada en el Comité de Acción Ciudadana Contra el Proyecto Inmobiliario Miraflores (CACPIIM), lleva tres años de lucha señalando los graves riesgos que implica el proyecto. Pese a que la Municipalidad de Viña del Mar y su Dirección de Obras Municipales (DOM) lo declararon «inviable», y que organismos técnicos como Sernageomin, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y la Dirección General de Aguas (DGA) advirtieron sobre críticos riesgos de aluviones, remociones en masa e incendios forestales, la construcción continúa.

Fecha: 22-01-2026

Medio: Contraplano Reñaca-Concón-Quintero-Puchuncavi-Zapa

Supl.: Contraplano Reñaca-Concón-Quintero-Puchuncavi-Zapa

Tipo: Noticia general

Título: Vecinos de Viña del Mar se movilizan masivamente contra megaproyecto Miraflores por graves riesgos y denuncian fallo judicial cuestionado

Pág.: 55

Cm2: 781,6

VPE: \$ 879.299

Tiraje:

Lectoría:

Favorabilidad:

Sin Datos

Sin Datos

☐ No Definida

El conflicto dio un giro judicial y político. El proyecto se mantiene gracias a un fallo de la Corte Suprema del 8 de agosto de 2025 que favoreció a la inmobiliaria. Sin embargo, la legitimidad de esa sentencia hoy está bajo la lupa.

El ministro redactor de ese fallo, Diego Simpértigue, fue destituido unánimemente por el Senado el 22 de diciembre de 2025 por «*notable abandono de deberes*» y falta de imparcialidad. Asimismo, el segundo integrante de la sala, el ministro Jean Pierre Matus, se encuentra bajo investigación y ha realizado una autodenuncia por sus vínculos con el sistema de influencias del caso Hermosilla, relacionado con pagos indirectos.

Los vecinos denuncian que su derecho a un tribunal imparcial, consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, fue vulnerado, resultando en una resolución que minimizó riesgos geológicos probados y daños estructurales ya existentes en viviendas y en el Colegio Ana María Janer, que alberga a 1.100 alumnos.

Impacto comunitario y acción internacional en Miraflores

Los residentes advierten que el proyecto sumaría unas 2.500 personas

a un sector cuya infraestructura ya está colapsada, con matrices de agua que fallan frecuentemente y vías de acceso –Subida Lusitania y Avenida Las Rejas– permanentemente saturadas.

Ante lo que califican como «*un caso de justicia capturada por intereses inmobiliarios*», el CACPIM escaló el caso a instancias internacionales. El 15 de octubre de 2025 presentaron una Denuncia y Solicitud de Medidas Cautelares de Urgencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigiendo la paralización inmediata de las obras por la vulneración flagrante al derecho a la vida y la integridad física.

«La masividad de esta protesta es el reflejo de una comunidad que se siente abandonada por la justicia chilena, pero que no descansará hasta que se respeten nuestras vidas. No permitiremos que el lucro inmobiliario pase por sobre la seguridad de nuestros hijos y ancianos», declaró Javier Alvarado, presidente del CACPIM.

La comunidad de Miraflores Alto mantiene su firme oposición, argumentando que se juega la seguridad de miles de personas, y espera que tanto las autoridades nacionales como el sistema interamericano de derechos humanos actúen para prevenir una potencial tragedia.